

CURAR EL SIDA CON UNA ASPIRINA

EL MUNDO. LUNES 9 DE ENERO DE 1995

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

Es un buen síntoma social que se haya frenado un poco el proceso de caída libre de los valores civiles, con una discusión sobre el trasunto político de la corrupción de partido y del crimen de Estado. Pasado el primer momento de reacción instintiva de apoyo o condena a los inculpadados en los GAL, hay que dar paso a una reflexión radical sobre las causas y motivos de que unos hombres de partido y de gobierno hayan podido dirigir en secreto, desde el Ministerio del Interior y con fondos reservados del Estado, expediciones de terror que se cobraron más de veinte asesinatos y un secuestro de persona inocente. El tema sobrepasa, en intensidad y extensión de la inmoralidad, los límites de la sociedad política. La preocupación por ocultar o descubrir a los máximos responsables del GAL se ha antepuesto a la necesidad de comprender el fenómeno para evitar que se reproduzca con otro gobierno. Quienes no han hecho profesión de las condenas morales a ETA, intentando llegar a las razones de su terror para atajarlo en sus causas y asumiendo el riesgo de parecer comprensivos con el delito, están ahora obligados a comprender intelectualmente al terrorismo de Estado, para saber si proviene sólo de unas malas personas o ha de ser engendrado además por unas malas instituciones.

Mientras que la causa del terrorismo de ETA está en la impotencia de la pasión nacionalista para alcanzar la independencia vasca, la del terrorismo de Estado está en la impotencia del gobernante para mantener el orden público. Ambos terrorismos, para compensar su falta de autoridad moral, tienen que sobrecoger a la opinión con acciones de poder excesivo. Ambos quieren impresionarse a sí mismos, más que a su adversario, para dar aliento a su débil confianza en las instituciones con la eficacia instantánea que les presta un día de terror. El terrorismo de Estado se justifica a sí mismo en la ineficacia institucional que le obliga a elegir, como mal menor, el camino áspero, pero «heroico», del terror. El terror etarra mata por razón de una causa política imposible. El terror estatal asesina por razón de una orden administrativa al servicio de una imagen de eficacia del Gobierno. Moralmente, ambos son igualmente aberrantes. Pero el crimen de Estado no tiene rival que le dispute la primacía en el reino de la destrucción institucional y del nihilismo de los valores. Nada ni nadie ha hecho, ni puede hacer, más daño al Estado de partidos que el Gobierno responsable de los GAL. Que ni siquiera cree en el Estado de Derecho predemocrático.

Sin perjuicio de analizar en otro momento los alegatos en favor del terrorismo de Estado, lo que me importa destacar aquí es el carácter ineluctable de la sospecha que recae sobre el primer beneficiario del crimen, que siempre es el Jefe del Gobierno cuando se trata de terrorismo de Estado. Esa sospecha crece en los gobernados en proporción directa al grado de confianza que depositen las instituciones en los gobernantes. Y cuando el juego institucional está basado, como sucede en España, en la supuesta buena fe de los partidos y en la responsabilidad etérea de los gobernantes, podemos asegurar que la corrupción y el crimen de Estado serán incorregibles. Nadie tendría legitimidad social para sospechar lo peor de su Gobierno, si las instituciones políticas tuvieran la precaución de concebirse como si fueran a estar presididas y desempeñadas por profesionales del crimen. Pero el Estado de partidos hace lo contrario. Diseña ángeles y fabrica demonios. La impunidad de un poder incontrolado salta limpiamente las pequeñas barreras que levanta contra el delito la conciencia personal. Quien acepta gobernar sin control es, por ese solo hecho, una persona irresponsable, o sea, un criminal de Estado en potencia. Creer que la sustitución del PSOE por el PP bastaría para acabar con los crímenes gubernamentales requiere la misma dosis de ingenuidad que se necesitaría tener para querer curar el sida con una aspirina.